

Santiago, diez de febrero de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En autos RIT T-45-2023, RUC 2340466309-7, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, caratulados “Tiare Fuentes Sobarzo con Municipalidad de San Bernardo”, por sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se desestimó tanto la demanda principal de declaración de existencia de relación laboral, tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y cobro de prestaciones, como la subsidiaria de despido injustificado.

La demandante dedujo recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por resolución de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, lo rechazó.

En contra de este último pronunciamiento la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos a relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existan distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia en contra de la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que la materia de derecho que se solicita unificar consiste en determinar la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos de la Administración del Estado, en atención a si las funciones desplegadas corresponden a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si se ejecutaron bajo índices de subordinación y dependencia.

Reprocha que la decisión se apartara de la doctrina sostenida en las que acompaña para efectos de su cotejo, dictadas por esta Corte en los antecedentes N° 11634-2022 y 11610-2022, en que se sostuvo que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre personas naturales y organismos de la Administración del Estado, en la medida que se desarrollen fuera del marco legal que los autoriza a contratar sobre



la base de honorarios y que revelen características propias de un contrato de trabajo.

Dicho criterio jurídico condujo a calificar como laborales los contratos celebrados entre los demandantes y los municipios demandados; en el primer caso, respecto de una asistente social, que entre los años 2011 y 2019, se desempeñó en el Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar ejecutado por el Centro de la Mujer de la municipalidad, en mérito de un convenio celebrado con el Servicio Nacional de la Mujer, con jornada y beneficios como licencias médicas, feriados y otros; y, en el segundo, en favor de un particular que entre los años 2018 y 2021, desarrolló tareas como monitor comunitario para el Programa Integral del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Asuntos Comunitarios de la municipalidad, contando con instalaciones en el edificio consistorial, sujeto a una jornada de trabajo, a las instrucciones de un superior jerárquico, y asignándosele obligaciones ajenas a las convenidas en los contratos celebrados.

**Tercero:** Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que la demandante dedujo, basado en las causales establecidas en los artículos 478 letras b) y c), y 477 del Código del Trabajo, la última, acusando la infracción de sus artículos 1°, 7°, 8°, 162, 163 y 168, del artículo 4° de la Ley N°18.883, y del artículo 2° inciso cuarto del referido código, en relación con sus artículos 485 y 489.

En sustento de la decisión, respecto del primer motivo, se estimó que si bien se afirma que se conculcaron las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, no se indica qué regla, principio o máxima fue vulnerado y cómo ello se refleja en los hechos acreditados, sin perjuicio que de la lectura del fallo se advierte que se analizaron los medios probatorios y se señaló en forma motivada, sin contradecir ningún principio de la lógica ni máxima de experiencia, los fundamentos del rechazo de la demanda principal y subsidiaria; en cuanto al segundo, tras fijar los hechos asentados, en particular, que las labores para las cuales fue contratada la actora fueron de carácter específico, transitorias, acordes a la prestación de servicios ligados al Programa Vínculos, de objetivos y duración acotados, y financiado por la Administración Central, se razonó que sobre esa base fáctica no cabe una conclusión jurídica distinta; y, en lo que atañe al tercero, reiterando consideraciones similares al del anterior, se sostuvo que luego de valorarse la prueba rendida, se desestimó cada indicio de laboralidad alegado por la actora, analizando para ello lo dispuesto en los artículos 4° de la Ley N°18.883 y 7° del Código del Trabajo, coligiendo que en el caso quedó acreditada la contratación de servicios a honorarios de conformidad a la primera, pues se estableció que las labores pactadas y ejecutadas estuvieron ligadas a los objetivos



del Programa Vínculos, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con una duración limitada en el tiempo y con cometidos referidos a los fines y lineamientos perseguidos por el programa, sin que se constate la infracción a los preceptos invocados, máxime que lo planteado por la recurrente importa modificar las conclusiones fácticas asentadas.

**Cuarto:** Que, según se observa, las sentencias ofrecidas para su cotejo no resultan idóneas para los efectos previstos en el artículo 483-A del Código del Trabajo, por fundarse en una situación distinta que impide la homologación que se pretende. En efecto, si bien en ellas se aplica la tesis jurídica que pretende la recurrente, lo cierto es que se sustenta en hechos diversos a los establecidos en el caso, pues en ambas se establecieron diversos indicios de subordinación, los que en la primera se verificaron a través de los más de siete años y en la segunda, si bien se trata de una contratación más breve, de casi tres años, tuvo dimensiones más amplias, en tanto se encomendaron a la demandante funciones que no decían relación únicamente con la función pactada, circunstancias que en uno y otro caso condujeron a concluir que los servicios prestados no correspondieron a cometidos específicos, excediendo del marco legal que autorizó su contratación, y que se desarrollaron bajo el vínculo de subordinación y dependencia que, conforme a los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, determina la existencia de un contrato de trabajo; sustrato fáctico contrario al de la que se impugna, en que se dio por probado que la actora desempeñó un cometido específico, relacionado con un programa puntual y delimitado, al que se incorporó dada su experticia profesional, por un período que no excedió de dieciocho meses, sin que se asentara que el municipio demandado ejerciera el poder de mando y dirección que es propio de la calidad de empleador que se le atribuye, descartándose los indicios de laboralidad en que la actora sustentó su pretensión.

**Quinto:** Que, cabe recordar, que un requisito esencial para la procedencia del recurso en análisis es que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, la decisión haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, es menester la existencia de una contradicción jurisprudencial, que coloque a esta Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto debe prevalecer. Sin embargo, a la luz de lo expuesto, tal exigencia no aparece cumplida en el caso, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el



inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, razonamientos que conducen a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 2.270-24.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Jessica González T., Mireya López M., y los abogados integrantes señor José Miguel Valdivia O., y señora Irene Rojas M. No firma la ministra señora González y el abogado integrante señor Valdivia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, diez de febrero de dos mil veinticinco.



En Santiago, a diez de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

